

DIARIO OFICIAL

DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

OFICINAS: Calle Florida, Núm. 155a

MONTEVIDEO, Viernes 3 de Mayo de 1907

TOMO VII - Núm. 477

PODER LEGISLATIVO

CÁMARA DE SENADORES

Sesión celebrada el día 29 de Abril de 1907

PRESIDE

EL DOCTOR DON FELICIANO VIERA

A las 4 y 5 p. m., entraron al salón de sesiones, los señores: Areco, Tiscornia, Lenzi, Segundo, Serrato, Cuñarro, Blengio Rocca, Ros, Pons, Berro, Magariños Veira, Soca, Iglesias, Espalter, Campisteguy y Travieso.

Señor Presidente—Está abierta la sesión.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Se leyó.

Si no fuera observada, se considerará aprobada.

Queda aprobada.

Se va a dar lectura de los asuntos entrados.

Se dió de lo siguiente:

—El Poder Ejecutivo acusa recibo de la ley que lo autoriza para invertir la suma de veinte mil pesos en los gastos que demande el envío a La Haya de la Delegación que representará a la República en la segunda Conferencia de la Paz.

(Archivase.)

—La Junta Electoral del Departamento del Salto remite testimonio de las elecciones complementarias de Junta Económico-Administrativa de ese Departamento.

(A la Comisión de Legislación.)

—Don Juan R. Menchaca, en representación de don Luis Duarte, solicita de Vuestra Honorabilidad se le declare comprendido, a los efectos de la jubilación, en los beneficios del artículo 8.º de la Ley de 11 de Julio de 1906, ampliatoria de la de 14 de Octubre de 1904.

(A la Comisión de Peticiones.)

Se va a entrar a la orden del día.

Continúa la segunda discusión general del proyecto de resolución recaído en la solicitud de la Junta Electoral de la Florida sobre eliminación de un miembro de ella, el señor don Alberto Bahamonde.

Había quedado con la palabra el señor senador por la Florida.

Señor Lenzi—Señor presidente: No voy a reasumir lo dicho en la sesión anterior, porque eso llevaría tiempo y lo creo innecesario; por otra parte es mi propósito no ocupar por mucho tiempo más la atención del Honorable Senado respecto a este asunto; que por lo que hace a la doctrina que estoy defendiendo, creo que ha quedado bien aclarada, no sólo en lo que se refiere a la cuestión, diremos de forma, esto es: de que el Senado no puede destituir a un miembro de la Junta Electoral, sino en lo que se refiere a la cuestión de fondo, a que el estado político se justifique con la inscripción en el Registro Cívico una vez que la inscripción queda calificada.

En la última sesión tuve oportunidad de leer las opiniones de los legisladores de 1873, que fueron los que sancionaron la ley del 74, respecto al ejercicio de la ciudadanía, y pude evidenciar que el criterio que predominó en los legisladores que sancionaron aquella ley, fue, que era necesario contemplar, en el ejercicio de la ciudadanía legal, dos circunstancias: el hecho y el derecho; esto es: el hecho del ejercicio de la ciudadanía, y el derecho de esa ciudadanía para el que habiéndola ejercido se pone en las condiciones legales que la ley preceptiva para poder incorporar su nombre en el Registro que lleva el Ministerio de Gobierno. Que si el extranjero ejerce y desempeña puestos públicos civiles o militares que importen el ejercicio de la ciudadanía y si más tarde este extranjero obtiene carta de ciudadanía o inscribe sus despachos como empleado militar, debe retrotraerse la ciudadanía al tiempo en que de hecho se ejerció.

Y fue, pues, con este criterio liberal que se sancionó esta ley de 1874, ley de cuya vigencia hacen depender los opositores que el militar que no esté inscripto en el Registro del Ministerio de

Gobierno, no está en el ejercicio de la ciudadanía.

Esta misma ley de 10 de Julio de 1874, por lo que hace a los militares fué sancionada con oposición—si es posible usar esta expresión—con oposición, decía, de los mismos diputados de aquella Legislatura que la sancionó.

El origen de toda esta ley, como se sabe, fué la minuta de comunicación que quiso pasar al Poder Ejecutivo del Gobierno de 1874, observando que un militar extranjero ejercía un puesto público sin estar inscriptos sus despachos en el Registro respectivo.

Esa minuta fué absolutamente rechazada por toda la Cámara del 74, y como una forma conciliatoria vino la ley del 74, modificativa de la del 53, en la parte relativa a los militares.

Señor Areco—Por qué no dice derogatoria el señor senador?

En realidad la derogó en absoluto la del 53.

Señor Lenzi—Podría usar en realidad la palabra derogatoria, porque en efecto la ley de 1853 quedó derogada.

Pero yo decía modificativa, porque la ley del 53 y la del 74 no son distintas en su esencia; son muy similares, con la diferencia única de lo que hace ó dice referencia a los militares. Sin embargo, quizá fuera más justa y más exacta la expresión derogatoria que modificativa, como observa el señor senador.

Decía, señor presidente, que los legisladores del 74 discutieron el proyecto de ley de Julio del mismo año, que después vino a ser ley de la República y decían lo siguiente: El doctor Herrera sostenía esta tesis: «Que tratándose de militares, era imperativa la ciudadanía, por el hecho de aceptar un empleo militar; que la ciudadanía en este caso estaba justificada por la situación de ser oficial del Ejército.»

Me parece, decía el doctor Herrera, que es absurdo confiar los ejércitos en manos de extranjeros, confiar su independencia y sus instituciones a quienes no tienen la calidad de ciudadanos.

Por el hecho, pues, de que un ciudadano extranjero sea oficial del ejército y defienda su independencia y sus instituciones, ese oficial lleva en sí el sello de la ciudadanía—y volvía a invocar aquel precepto constitucional tan repetido en este debate: que el art. 8.º establece, como disposición preceptiva, que son ciudadanos los extranjeros que acepten grados militares y no que puedan serlo; ese es un mandato imperativo y no facultativo, discrecional para el ciudadano legal.

El doctor Ramírez decía también: «que los militares llevaban en sus presillas y en sus grados militares el sello de la ciudadanía.»

No sucede así tratándose de los otros casos del artículo 8.º de la Constitución: en que es necesaria la justificación ó la prueba mejor dicho, de que esos extranjeros reúnen las condiciones del artículo 8.º de la Constitución de la República.

Agregaba el doctor Ramírez, más ó menos: «Los extranjeros casados con hijas del país, son ciudadanos legales por el artículo 8.º, pero con las circunstancias y las condiciones que exige la prueba del hecho.»

El extranjero en ese caso no lleva escrito en la cara si es casado con una hija del país, ó que es nacido de padres nativos ó si tiene hijos naturales; necesita justificar este estado, pero el militar lleva en su traje de militar del ejército, en sus presillas ó en sus galones de oficial la característica y el sello de la ciudadanía en ejercicio.

El doctor Sagastume decía: «A ese hombre que se le admiten los servicios más meritorios—los de sangre—no se le puede negar el ejercicio de la ciudadanía, que va anexa a esos servicios:—el derecho del voto.»

(Entra el señor Travieso.)

De modo, pues, que como las leyes se interpretan recurriendo a la sanción de ellas, al espíritu que predominó en los legisladores que las formularon y las discutieron, invoco cuál fué la opinión liberal que predominó en aquella Asamblea del 74, concordante, por otra parte, con la disposición preceptiva del artículo constitucional, en lo que se refiere a los extranjeros que aceptan grados militares en el país.

El doctor Aréchaga, en su interesante obra «La Libertad Política», ha tratado de

esta misma cuestión: del ejercicio de la ciudadanía de los extranjeros. Sostiene en la página 98, que la ciudadanía legal en los extranjeros es obligatoria para los militares, que no pueden ponerse en situación de optar a ser ciudadanos ó no; que lo son preceptivamente, por la Constitución de la República.

Esta es una opinión autorizadísima; cito la de un ciudadano que se especializó en cuestiones de derecho constitucional y cuyos textos sirven de enseñanza para todos los hombres que estudiamos cuestiones de esta naturaleza.

Señor Tiscornia—¿Me permite el señor senador?

Podría darle un dato que ratifica ese mismo parecer.

La ley de Abril del año 30, referente a Registro Cívico, ordenó la inscripción de los ciudadanos comprendidos en el artículo 8.º; los consideró ciudadanos en ejercicio. Lo que tiene es que en esa parte la ley del año 30 fué derogada por la ley del año 53, y la del 53 fué derogada por la ley del 74; y ahora la que está en vigencia no es la del año 30; tampoco es la del 53, sino la del 74.

Señor Lenzi—Precisamente: el comentario que cito del doctor Aréchaga en su obra «Libertad Política», se refiere a la ley del 74.

Señor Tiscornia—Porque él lo que pretendía era derogar la ley del 74.

Lo que pretendía el doctor Aréchaga, y a ese objeto presentó un proyecto cuando fué Consejero de Estado, un proyecto con el mismo fin de los que presentaron el doctor Acevedo y don Setembrino Pareda. Pero esos proyectos no se han convertido en ley. Es una tendencia, es un propósito que perseguían y que, desgraciadamente, no podrá realizar el doctor Aréchaga.

Señor Lenzi—Una tendencia y un propósito perfectamente justificado, porque la verdadera doctrina constitucional es la doctrina liberal, que facilita la nacionalización, ó, mejor dicho, el ejercicio de la ciudadanía a los extranjeros.

Esa no solamente habrá sido una tendencia del doctor Aréchaga y del doctor Acevedo, sino que es tendencia de todos los hombres de pensamiento en el país, y los mismos partidos políticos en sus programas de principios establecen el beneficio y la necesidad de incorporar a la ciudadanía oriental a los extranjeros.

Señor Tiscornia—Pero no obligándolos a los extranjeros a ser ciudadanos, porque eso sería poco menos que repulsarlos del país.

Señor Lenzi—Yo no citaba el proyecto del doctor Aréchaga, que presentó como diputado; leía al comentarista de Derecho Constitucional, y decía que para él la ley del 74 consagra la ciudadanía para los militares como obligatoria.

Que en los otros casos de la ley del 74 es voluntario, es decir, pueden los extranjeros presentarse a solicitar su carta de ciudadanía; pueden hacerlo ó no. Pero, según el doctor Aréchaga, aun dentro de la ley del 74, la ciudadanía es obligatoria para el extranjero que acepta un grado militar en el país.

El señor senador por Río Negro, ha dicho: «Muy interesante será que el señor senador por Florida nos presente un caso práctico, posterior a la ley del 74, en que se haya admitido esta doctrina.»

Es decir, que se haya admitido que el hecho del ejercicio de la ciudadanía se admite cuando ese extranjero legitima ó legaliza posteriormente sus derechos de ciudadano legal.

Para satisfacer al señor senador por Río Negro, puedo citarle el caso que ocurrió en la Cámara del 97, en la que presentó sus poderes un diputado electo, nacido en la República Argentina, y que no tenía los cinco años en el ejercicio de la ciudadanía que fija el artículo 24 de la Constitución, para ser electo diputado.

Alguien observó esta circunstancia y le bastó al denunciado demostrar que, si bien era cierto que su carta de ciudadanía no databa de cinco años, en la fecha de la elección, había desempeñado puestos públicos, entre otros el cargo de Jurado, que importaba el ejercicio de la ciudadanía, y los diputados del año 97, en la misma sesión que se justificó este hecho, aceptaron los poderes de ese ciudadano legal.

La Cámara del 97 aceptaba, pues, la doctrina que había predominado en la sanción de la ley del 74: que en la ciuda-

danía legal hay que contemplar el hecho y el derecho, y si bien de derecho, no tenía el electo los cinco años de ciudadanía, los tenía de hecho, por el ejercicio y desempeño de empleos públicos.

Ya tiene, pues, el señor senador por Río Negro satisfechos sus deseos.

Y es, señor presidente, que esta es la verdadera doctrina, en esta cuestión, que el eminente constitucionalista doctor Aréchaga, en la obra que he citado, se ocupa de probar.

Que la Constitución de Norte América, es excesivamente liberal—se dice—para aceptar la ciudadanía de los extranjeros, y el doctor Aréchaga demuestra que mucho más liberal que esa Constitución de Norte América, es la nuestra; y para demostrar su tesis, cita las disposiciones de ciudadanía preceptiva que establece el artículo 8.º de la Constitución y la ley del 74.

En ellas está expresamente concretado, que los ciudadanos extranjeros que admiten en el país grados militares, son ciudadanos legales.

En efecto, parece indefendible que el que vive en el país, que es militar, que está a órdenes del Poder Ejecutivo, como militar,—con despachos desde el año 1895; que está además inscripto en el Registro Cívico Permanente desde el año 1898, cuya boleta de inscripción ha presentado y lleva el número 392; se sostenga que no está en el ejercicio de la ciudadanía, aun cuando también ha inscripto sus despachos militares en el Ministerio de Gobierno!

Pero yo decía, que aun aceptando que sea dudoso—si la ley del 98 que creó el Registro Cívico Permanente ha modificado la ley del 74—que en ese caso lo que corresponde es aclarar si hay entre la ley del 74 y la ley del 98, disposiciones que no se armonicen ó sean derogatorias las unas de las otras.

Siempre que una ley presente alguna duda, es criterio que ha predominado en el Cuerpo Legislativo, su aclaración.

Yo creo en absoluto que la ley de 1898, por lo que se refiere a los militares, es completamente clara; establece que la simple inscripción en el Registro Cívico de los despachos militares, pone al ciudadano inscripto en el ejercicio de la ciudadanía, si esa inscripción no es tachada en el período de tachas.

El señor senador por Río Negro y la Comisión de Legislación que lo acompaña, establecen que esa disposición de la ley no deroga la del 74.

Yo digo que por la letra y por el espíritu de la ley del 98, está derogada en esa parte; pero si existe alguna duda puedo invocar las propias opiniones y los propios párrafos que citó el señor senador por Río Negro, en su discurso de la sesión del 17 del corriente, para ver cuál ha sido siempre el criterio del legislador cuando hay dudas del alcance real de una ley.

Cito los propios párrafos que invocó el señor senador por Río Negro: El doctor Herrera decía: «lo primero que debe hacerse es aclarar lo que es objeto de duda y discusiones contrarias.»

De modo, pues, que si la ley del 98 establece, — preceptivamente — que la presentación de los despachos militares es justificativo de inscripción, y el que llena ese requisito ha cumplido con la ley; si alguna duda hubiera para terceros, es el caso que precisaba el doctor Herrera — lo que debe hacerse es aclararse.

El doctor Requena y García, decía: «que lo regular y lo justo era empezar, ante todo, por establecer la interpretación de la ley, por establecer la verdadera doctrina que ha de prevalecer.»

De modo, pues, que si algún vacío hubiera en la ley del 98, debería venir una ley aclaratoria, diciendo: «No valen ya los despachos militares para inscribirse en el Registro Cívico; se necesita, además, la justificación de la inscripción en el Ministerio de Gobierno.»

Señor Tiscornia—¿Me permite el señor senador?

Señor Lenzi—Voy a terminar estas citas. El señor Lerena decía: «Esta cuestión no puede resolverse sin que antes se interprete de una manera auténtica la ley.»

Puede el señor senador por Río Negro, hacer la interrupción pedida.

Señor Tiscornia—Muchas gracias. Pero lo que el señor Lerena decía, era

tiene la facultad de nombrar miembros letrados y no letrados, es indiscutible que al poder hacer lo más, puede también hacer lo menos. La Asamblea no puede quitar condiciones constitucionales a los que deban ser miembros de la Alta Corte; pero puede ampliar el *minimum* de las condiciones que la misma Constitución establece.

Respetando el precepto constitucional, en lo que se refiere a las condiciones exigidas para los letrados, fijando determinado número de éstos para que ingresen a la Alta Corte en carácter de tales, constitucionalmente hablando—bien podemos, me parece, establecer que los otros miembros reúnan condiciones mayores que las que la misma Constitución exige para la segunda clase de miembros de la Alta Corte.

Lo que evidentemente quisieron los Constituyentes, es que en la más alta autoridad judicial hubiera algunos magistrados con todas las condiciones establecidas en el artículo 93 de la Constitución; en cuanto a los demás miembros, les bastaba con que reunieran las condiciones que en el mismo se exigen para los no letrados.

Yo no sé si me he explicado bien, pero he explayado mis ideas y de acuerdo con ellas voy a votar la fórmula propuesta por el doctor Vázquez Acevedo.

Señor Rodríguez Larreta—Señor presidente: He pedido la palabra, más que para ocuparme fundamentalmente del asunto, sobre el cual ya he hablado demasiado largo, para llamar la atención sobre ciertas ideas que se han avanzado en el seno de la Cámara, y que tienden, a mi juicio, a establecer un falso criterio de interpretación de las leyes.

Tanto el señor Massera como el señor diputado Espalter, han dicho y repetido que las leyes establecen que cuando «la letra de la ley es clara, no se debe desatender su tenor literal a pretexto de consular su espíritu».

Señor Massera—Son los preceptos del Código Civil.

Señor Rodríguez Larreta—Es inexacto: el Código Civil no dice semejante cosa.

Señor Massera—Pues es raro.

Señor Rodríguez Larreta... y si la dijera, incurriría en un gran error.

Señor Massera—Está dividido el señor diputado.

Señor Rodríguez Larreta—Aquí lo tengo.

«Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consular su espíritu».

Señor Massera—¿Y qué es el tenor literal?

Señor Rodríguez Larreta—Cuando el sentido de la ley es claro. Acabo de leerlo y me parece que es claro lo que leo.

Es sólo cuando el sentido de la ley es claro, que no se puede desatender el tenor literal de la misma para consular su espíritu; pero es necesario que sea claro el sentido; es decir, el pensamiento del legislador es lo que tiene que ser claro.

Señor Massera—Que es clarísimo en este caso.

Señor Carvalho Lerena—El sentido de las palabras es claro, porque dice que se necesitan cuatro años de magistratura y seis de abogacía.—(Interrupciones).

Señor Presidente—Se ruega a los señores diputados que eviten los diálogos.

Señor Rodríguez Larreta—Estoy hablando, en este momento, del criterio general de interpretación. Lo que es necesario que sea claro en la ley, para que no se preste a interpretaciones, es el sentido de la misma; vale decir, el pensamiento que ha tenido el legislador al establecer una tesis determinada.

Precisamente, lo que en este caso escapa a la generalidad de los diputados que han hablado, es el pensamiento que tuvieron los Constituyentes, cuando dictaron o establecieron el artículo 93 de la Constitución.

Tan es así, que todavía no ha habido ningún diputado que pueda interpretar o decir con razón, qué fue lo que quisieron decir o lo que quisieron hacer los Constituyentes, cuando se refirieron a que en la Alta Corte pudiera haber miembros no letrados.

Señor Massera—Yo lo estudié ampliamente.

Señor Otero—¿Me permite?

El otro día, cuando hablaba el señor diputado Massera, tuve ocasión de recordar que en el Manifiesto de los Constituyentes está perfectamente explicado el punto.

Voy a leer, si me permite el señor diputado Rodríguez Larreta...

Señor Rodríguez Larreta—Muy bien.

Señor Otero... No voy a leer todo el párrafo, porque es un poco largo.

Hablando del juicio por jurados, dice: «La Administración de Justicia no continuará circunscripta a un pequeño número de hombres»—y después, más adelante, agrega: «Los procesos no quedarán

«cubiertos con el velo misterioso de las formas envejecidas, tanto más temibles, cuanto están menos al alcance del público».

Como lo dije hace un momento, aquellos señores estaban en el orden de ideas de la época, es decir de reacción contra el abuso de lo que se llamaba la *prueba formal*, que había dominado anteriormente y bajo la cual se habían cometido tantos excesos,—los excesos, por ejemplo, llamados de la *inquisición*, cometidos no sólo por los tribunales de la inquisición, como por los tribunales civiles.

Las formas preponderantes y los medios de prueba bárbaros, entre ellos el tormento, habían desacreditado bastante a la magistratura de los siglos anteriores.

Se estaba en una época de reacción y se admitía que el buen sentido de los hombres buenos, valía más, para la solución acertada de las cuestiones judiciales, que el criterio formalista de los hombres de derecho.

Los Constituyentes concibieron tribunales mixtos, en que hubiera algunos magistrados perfectamente preparados en derecho y al lado de ellos hubiera también otras personas—hombres buenos—que equilibraran una influencia cuya exageración consideraban nociva.

Así es como yo entiendo el asunto y como lo explica clarísimamente la evolución histórica de las formas procesales.

Señor Rodríguez Larreta—Perfectamente, señor presidente.

Esa es una interpretación tal vez muy inteligente del artículo constitucional; pero el doctor Espalter, que es un joven abogado que ha demostrado ya en la Cámara varias veces su competencia y sus dotes intelectuales, acaba de darnos otra interpretación, atribuyendo esa disposición al propósito que tuvieron los Constituyentes de dar representación en la Alta Corte a los distintos gremios que existían en el país.

Yo dije en una interrupción, hace un momento, que creía que se había tenido hasta el pensamiento de darle representación a la Iglesia.

Señor Otero—Y es exacto.

Señor Rodríguez Larreta—Y lo creo así también.

Tuvieron esa idea, pero en el momento actual no cabe duda que todas las manifestaciones que se han hecho en la Cámara y fuera de la Cámara, son en el sentido de que la Corte debe constituirse con letrados.

Desde que hay ese pensamiento, yo no sé, señor presidente, por qué ha levantado tanta algarazca esta opinión de la Comisión de Legislación, que consistía en establecer que los conjuceces tenían condiciones de magistrado. Parece que toda la resistencia es contra los conjuceces...

Señor Freire (Don Tulio)—Porque es inconstitucional.

Señor Rodríguez Larreta... y que, en obsequio a que no se admita la doctrina relativa a los conjuceces, sostenida por la Comisión de Legislación, se quiere abrir la puerta para que puedan entrar a la Corte algo menos que conjuceces,—legos, que no hayan integrado nada nunca, que puedan haber mandado en alguna circunstancia extraordinaria un cuerpo de ejército y haber ganado una batalla.

Señor Buenafama—Y quiere cerrarseles a los que han ejercido la profesión, porque no tienen los cuatro años.

Señor Rodríguez Larreta—Perfectamente.

Así que, señor presidente, reducida la cuestión, o sea la disidencia en que estamos, a términos prácticos, yo no veo francamente la importancia que tiene: me parece que no tiene importancia ninguna.

Partiendo de la base de que hay el pensamiento general de que todos los miembros de la Corte deben ser letrados, me inclino a creer que la fórmula de la Comisión y la fórmula del doctor Vázquez Acevedo, son, si no iguales, completamente equivalentes en sus resultados.

Por consiguiente, yo, por mi parte, no tendría inconveniente—hablo a mi nombre personal—en aceptar la fórmula del doctor Vázquez Acevedo, con tal que se modificara en el sentido de lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo dice que bastará que dos de los miembros de la Corte tengan las condiciones del artículo 93 de la Constitución, y el doctor Vázquez Acevedo dice que sean tres. Yo creo que es preferible establecer que sean dos solamente, porque si no, amarramos a la Asamblea General y no le vamos a dejar campo de acción para elegir.—(Apoyados.)

—Es preciso desembarazar la acción de la Asamblea General, si se quiere tener Corte. Ahora, si lo que se quiere es dictar una ley frustránea, que no se pueda practicar después, porque no haya medios hábiles para constituir debidamente la Corte, entonces me explico que se estén poniendo todas esas dificultades.

Señor Massera—Cuando no haya medios hábiles, no se debe hacer la Corte, dijeron los Constituyentes varias veces durante la discusión de la Constitución.

Señor Rodríguez Larreta—Yo, señor presidente, no he consultado a mis colegas, pero no tendría inconveniente, repito, en aceptar el proyecto del doctor Vázquez Acevedo con esa modificación. Dos miembros de la Corte tendrían que tener necesariamente las condiciones del artículo 93, en la forma restrictiva... y no encuentro una palabra adecuada para calificar el criterio del doctor Massera en este caso... *restrictiva y sin salida*,—diré así, pero que para los otros tres, la Asamblea pueda elegir libremente entre los letrados que existen en el país y que tienen condiciones de notoria competencia.

Señor Massera—Yo no interpreto, doctor Larreta, de esa manera.

Señor Presidente—¿Ha sido apoyada la enmienda del señor diputado Rodríguez Larreta?

Señor Rodríguez Larreta—Yo, lo que hago es adherirme a la del doctor Vázquez Acevedo, con esa pequeña modificación.

Señor Otero—Viene a ser la del Poder Ejecutivo.

Señor Arena—Es la que yo había propuesto, señor presidente, hoy;—la del Poder Ejecutivo modificada en el último inciso.

Señor Presidente—La Mesa necesita saber si la indicación del doctor Rodríguez Larreta ha sido apoyada.—(Apoyados.)

—Está en discusión conjuntamente con las demás fórmulas propuestas.

Señor Pérez Olave—Deseo hacer una simple aclaración, a nombre de la Comisión de Legislación.

Yo no acepto la fórmula del doctor Vázquez Acevedo, porque creo que ésta viola claramente el espíritu constitucional.

Señor Massera—Y la letra, doctor Pérez Olave.

Señor Pérez Olave—No pueden entrar a la Alta Corte abogados a título de no letrados.

Todo abogado es letrado y por lo tanto debe tener las condiciones del ejercicio de la profesión y de ejercicio de la magistratura.

Sigo creyendo que la fórmula que satisface ampliamente, que encuadra muy bien en el espíritu constitucional, es la dictada por la Comisión de Legislación, y por lo tanto, la sostengo.

Señor Freire (don Tulio)—Pido, señor presidente, que se lea otra vez la moción del doctor Vázquez Acevedo.

Señor Presidente—Léase.

(Se lee).

Señor Arena—Ahora, señor presidente, debería leerse el artículo tal cual lo proyectamos el doctor Rodríguez Larreta y yo, que no tiene más modificación que la siguiente: decir «dos» al principio y «tres» después.

Señor Presidente—Léase.

(Se lee).

Señor Rodríguez Larreta—Es la fórmula del Poder Ejecutivo con la diferencia que exige letrados.

Señor Pelayo—Pero con eso quiere decir que esos tres no reúnen las condiciones exigidas por la Carta Fundamental, porque el decir que los dos primeros deben tener esas condiciones, precisamente hace resaltar más que los otros no deben tenerlas.

Señor Arena—Los otros van en carácter de no letrados.

Señor Freire (don Tulio)—Yo, señor presidente, comparando el artículo que se acaba de leer, propuesto por el doctor Vázquez Acevedo, con el del Poder Ejecutivo, creo que el artículo del Poder Ejecutivo se adapta más a los términos constitucionales, porque se está haciendo una lamentable confusión.

El artículo que trata de los miembros de la Alta Corte se divide en dos categorías: la primera categoría dice que deben tener seis años de ejercicio de abogacía y cuatro de magistratura, y la segunda categoría dice que podrán ser no letrados, —no dice: «serán no letrados», porque no es imperativo el mandato. Dice que *pueden ser no letrados*, porque lo admite perfectamente la condición para ser senador en la última parte del artículo 30, que dice que debe tener un capital de diez mil pesos o renta equivalente o profesión científica que se la produzca.

De manera que admite perfectamente el caso de que todos los demás abogados puedan ser electos miembros de la Alta Corte.

No apoyo la moción del doctor Vázquez Acevedo, porque pone la condición a la segunda parte de que han de tener cuatro años de magistratura. Si esos señores que poseen cuatro años de magistratura están autorizados para ser nombrados miembros de la Alta Corte y la Asamblea los puede nombrar como miembros letrados, nada más que letrados,

cómo admite la Constitución, que tengan título o profesión científica?

De consiguiente yo, señor presidente, declaro que voy a votar el artículo propuesto por el Poder Ejecutivo, porque es el que verdaderamente se encuadra más en armonía con la Constitución.

He dicho.

Señor Carvalho Lerena—Voy a ser muy breve, señor presidente, porque es esta ya una cuestión muy debatida y porque precisamente, cuando se puso en discusión el artículo de la Comisión de Legislación, hice una especie de resumen de todos los proyectos de que daba cuenta el repartido, estableciendo que, en mi concepto, sólo era verdaderamente constitucional el primer proyecto del Poder Ejecutivo, que constituía la Alta Corte con cinco miembros letrados que reunirían las condiciones exigidas por el artículo 93, y que los otros tres proyectos no eran constitucionales.

En ese voto que fundaba, no con el propósito de hacer un discurso, sino de salvar mi opinión, dejé asimismo establecido que, por precepto constitucional la Alta Corte podía constituirse con letrados o no letrados.

La facultad concedida por la Constitución a las Asambleas sucesivas para organizar la Alta Corte, ha llevado a las Legislaturas subsiguientes a establecer la Administración de Justicia bajo un plan distinto completamente del que fijaron los Constituyentes; se ha procurado excluir a los no letrados de los Tribunales y de los Juzgados que antes eran desempeñados por inteligentes.

Los letrados han reemplazado a los no letrados.

Respecto a la facultad que la Constitución acuerda para establecer la Alta Corte, no cabe la menor duda que pueden ser letrados y no letrados los miembros que deban componerla, aún cuando las conveniencias públicas aconsejan hoy se forme exclusivamente con letrados.

Pero una vez resuelto cómo ha de quedar constituida la Alta Corte—si con letrados o no letrados,—esa facultad dada a la Asamblea para establecer la composición de ese Alto Cuerpo, desaparece para la elección de los candidatos.

En el primer caso, cuando se constituye la Alta Corte, la Asamblea desempeña funciones legislativas; y cuando, establecida la composición de la Corte, procede a designar los miembros que han de componerla, tiene que ajustarse a lo que dispone la misma Constitución, porque eso no es ya facultativo, es preceptivo: los letrados deberán tener seis años de ejercicio en la profesión de abogado, cuatro en la de magistratura y las demás calidades para éstos requeridas, y los no letrados tendrán 40 años cumplidos y las demás condiciones que establece la ley.—(Apoyados.)

—Votar letrados que no tienen las condiciones primeras del artículo 93, condiciones que están indicadas para ellos, es burlarse de la Constitución. La Asamblea, desempeñando funciones electorales, no puede dejar de cumplir el precepto constitucional. No está en el caso primero, cuando usa de las facultades que la Constitución le ha dado, de constituir la Alta Corte, de formarla con letrados o no letrados.

Si son letrados los que han de componerla, según la opinión que predomine en esta Cámara, deberán reunir las condiciones que requiere la primera parte del artículo 93, y no otras diferentes, como se ha estado sosteniendo.

He dicho.

Señor Presidente—Se va a votar.

Si se da el punto por suficientemente discutido.

Los señores por la afirmativa, en pie.—(Afirmativa.)

—Hay cinco fórmulas para resolver esta cuestión: la del Honorable Senado, la del Poder Ejecutivo, la de la Comisión Informante, la del doctor Vázquez Acevedo y la del doctor Rodríguez Larreta.

Van a leerse y votarse por su orden.

Señor Vázquez Acevedo—Yo acepto la modificación que ha propuesto el doctor Rodríguez Larreta. Así que puede eliminarse mi fórmula, o admitir en ella la modificación del doctor Rodríguez Larreta.

Señor Presidente—Perfectamente: se leerá la fórmula del doctor Vázquez Acevedo con la enmienda propuesta por los señores diputados Rodríguez Larreta y Arena.

Léase primero la fórmula sancionada por el Honorable Senado.

(Se lee.)

«Artículo 4.º La Alta Corte se compondrá de tres miembros letrados, con las condiciones fijadas por el artículo 93 de la Carta Fundamental, y dos miembros letrados o no letrados que reúnan los requisitos exigidos para estos últimos por la misma disposición y sean de competen-

